

AGENDA CIUDADANA

TRES GUERRAS

Lorenzo Meyer

Trinidad Diabólica.- Las tres guerras del título no se refieren al famoso arquitecto, pintor, escultor y escritor de Celaya del siglo XVIII --Francisco Tresguerras--, sino a una trinidad que se resume en un solo y terrible problema: la incapacidad del aparato estatal mexicano para hacer frente al reto que plantea a México la producción y el tráfico de drogas. Las tres tristes guerras son: a) la del gobierno mexicano contra los traficantes; b) la externa, con Estados Unidos como adversario-colaborador; c) la de los narcotraficantes entre si.

El problema del narcotráfico ha marcado ya tres cuartas partes del siglo XX mexicano, pero se ha agudizado en los últimos doce años. Es ahora cuando más personal, material y dinero se ha empleado para combatir las redes del narcotráfico pero también es ahora cuando se hace más evidente el fracaso del esfuerzo.

La Primera Guerra.- En México, la lucha oficial contra los productores y comercializadores de drogas se inició en forma poco espectacular entre 1916 y 1929, y en buena medida fue resultado de la presión que vino del norte tras la aprobación en Washington de leyes contra el uso del opio, la heroína, la cocaína y la marihuana. En efecto, fue entonces cuando el gobierno mexicano, encabezado por el grupo de Sonora, debió también de prohibir la producción y el comercio de esas drogas. (Toro, Celia, Mexico's "War" on Drugs, Causes and Consequences, Boulder, Lynne Rienner, 1995, pp. 5-9) En su origen, la campaña contra el narcotráfico fue de baja intensidad, como correspondía a algo que no había

surgido como una iniciativa local real sino inducida; el México de entonces tenía muchos otros problemas que resolver antes de darse el lujo de preocuparse por las drogas.

Al estallar la II Guerra, se incrementó la demanda legal de opio para los servicios de sanidad de Estados Unidos, y desde el norte se alentó, oficialmente, la producción de amapola y marihuana en México. Tras la guerra, la demanda legal cesó pero no la ilegal, así que la infraestructura existente ya no se desmontó, sólo se transformó. Con el correr del tiempo surgiría en los Estados Unidos la llamada "cultura de las drogas", y fue entonces cuando el problema para el gobierno mexicano se agravó, pues el país se transformó en un proveedor importante de la marihuana y la heroína demandadas en Estados Unidos. La producción y el contrabando de esos productos para el mercado del norte se convirtió en un gran negocio, donde se involucraron lo mismo campesinos que transportistas, policías que soldados, jueces que políticos. Indicador indirecto del ascenso de esta actividad lo proporciona el número de hectáreas de cultivos de marihuana y amapola supuestamente destruidas por las autoridades. El total anual pasó de 3 mil en 1967 a 22 mil seiscientas, veinte años más tarde. Para entonces, la geografía de la producción ya abarcaba de Guerrero a Chihuahua, pero había otra mayor y que iba de Campeche a Tijuana: la de la intermediación. En efecto, México se convirtió entonces en paso casi obligado de la cocaína sudamericana en su viaje a Estados Unidos; si en 1967 sólo se reportó un kilo de ese producto decomisado por las autoridades, para 1987 fueron casi doce toneladas (Toro, *op. cit.*, p.19, 33).

En esta guerra entre las instituciones estatales y los traficantes, las cifras de plantíos destruidos o de cargamentos interceptados aumentaron, pero más aumentó la producción y los envíos no detectados. Los millones de dólares a disposición de los carteles se convirtieron en proyectiles que perforaron las defensas de las instituciones oficiales: la Dirección Federal de Seguridad (DFS), la Procuraduría General de la República (PGR), la Interpol, las policías locales, el sistema judicial e incluso al propio ejército y a la armada.

El año de 1985 resultó particularmente significativo. En 1984 se había descubierto un enorme rancho productor de marihuana en Chihuahua --"El Búfalo"-- resguardado por elementos del XX regimiento de caballería. Una reacción de los afectados fue la tortura y asesinato en ese 1985 de un agente antinarcóticos norteamericano en Guadalajara, Enrique Camarena. La investigación posterior --forzada por Washington-- puso de manifiesto la relación estructural entre las policías federales, el ejército y los jefes de los carteles de la droga. Fue también en 1985, y a raíz del asesinato del periodista Manuel Buendía en 1984, que el gobierno de Miguel de la Madrid se vio forzado a disolver a la DFS --la policía política creada a raíz de la II Guerra Mundial-- por haber sido ésta totalmente penetrada por el narcotráfico.

En 1986 *The New York Times* (20 de octubre de 1986), citando como fuente al ex embajador John Gavin, hizo público algo que ya circulaba como rumor insistente: la sospecha de que el secretario de Defensa, general Juan Arévalo Gardoqui, su hijo, tres exgobernadores, un primo del presidente Miguel de la Madrid

y varios jefes policiacos y de la Interpol, mantenían relaciones con el narcotráfico. Más tarde, en julio de 1990, el presidente Carlos Salinas debió prescindir de los servicios de su secretario de Marina, el almirante Mario Schelenske Sánchez, por motivos que se sospechan relacionados con el narcotráfico. Sin embargo, fue necesario el arresto del general de división Jesús Gutiérrez Rebollo por tener lazos con el narcotráfico, pese a lo cual se le acababa de nombrar director del Instituto Nacional del Combate a las Drogas (INCD), para que fuera evidente que ninguna institución gubernamental estaba ya a salvo de la penetración de mafias que, se calcula, disponen de 500 millones de dólares anuales para sobornar a los encargados de combatirlos (*US News and World Report*, 29 de enero, citando un estudio de la UNAM). Y las sospechas de haber sido cooptados por los carteles de la droga no sólo recaen sobre generales, gobernadores, jefes de policía y agentes de la PGR, sino ya directamente sobre el círculo íntimo del expresidente Carlos Salinas, según testimonios, aún por validar, hechos en el juicio que se lleva a cabo en Texas contra Mario Ruiz Massieu, por enriquecimiento inexplicable (*Proceso*, 16 de febrero).

La Segunda Guerra.- Los ciclos de presión-cooperación entre los gobiernos de Washington y México motivados por el narcotráfico, se iniciaron, como ya se dijo, en los años veinte. Desde entonces, estos ciclos se han asociado a complejos procesos políticos, sociales y culturales norteamericanos, que favorecen que dirigentes políticos de ese país capitalicen los valores,

prejuicios, miedos y frustraciones de las mayorías en relación a las drogas.

Culpar al extranjero --mexicano, colombiano u otro-- de que varios millones de norteamericanos contradigan los cánones de la ética protestante y consuman drogas, es una salida fácil pero que no ataca a las verdaderas razones del mal. Sólo el poderío norteamericano explica que esa visión tan simplista sea la base de una política basada en la tesis que afirma que para acabar con la drogadicción en las ciudades norteamericanas hay que acabar con la oferta. Es el equivalente a pretender eliminar la prostitución acabando con las prostitutas. ¿Se ha podido? ¿se puede?.

Hoy, la tensión en la relación México-Estados Unidos motivada por el narcotráfico, está llegando a un nuevo estadio. La debilidad de las instituciones mexicanas, en particular su presidencia, las hacen muy vulnerables a presiones como el humillante proceso de certificación unilateral de cooperación con Washington --certificado de buena conducta-- en el combate a la producción y tráfico de drogas. Es humillante porque no hay lugar para la contrapartida: la certificación del resto del mundo a los esfuerzos norteamericanos por combatir dentro de sus fronteras el tráfico de esas drogas y, sobre todo, por modificar los patrones culturales y éticos que llevan a su consumo.

De continuar la tendencia actual, cada vez más la política exterior mexicana consistirá en reaccionar a la presión norteamericana en el pantanoso terreno del narcotráfico. Ya tenemos desde hace tiempo a una policía extranjera actuando en

nuestro territorio --la DEA-- ¿se le permitirá ahora tener estatus diplomático y portar armas? ¿se someterá el gobierno mexicano a las exigencias norteamericanas en materia de extradición, para hacer del caso de Juan García Abrego el primero de una serie? ¿se continuará con la política de estrechar aún más los lazos militares con Estados Unidos y someter la acción de nuestro ejército a su lógica e intereses, y empantanarlo aún más en una guerra sin perspectivas de victoria?

Que no quede duda, lo que hoy está en juego en este campo del narcotráfico y de la política bilateral frente a Estados Unidos, es el contenido mismo del concepto de soberanía.

La Tercera Guerra.— Las guerra entre los diferentes carteles mexicanos de la droga, tiene efectos terribles sobre las instituciones estatales. La tarea primaria del Estado es el mantenimiento de la ley y el orden, pero las guerras a plena luz del día entre los narcotraficantes --la balacera en el "Bali-Hai" de la ciudad de México, en noviembre de 1993, es un ejemplo--, son muestra de la incapacidad del Estado mexicano para cumplir con su razón de ser.

El más importante de los carteles mexicanos es el de Ciudad Juárez, encabezado por Amado Carrillo Fuentes y su principal rival es el de Tijuana, controlado por los hermanos Arellano Félix. Luego esta el cartel del Golfo, en plena reorganización desde que se envió a prisión a Estados Unidos a su jefe, Juan García Abrego. Finalmente está el cartel de Sonora, que capitaneó Rafael Caro Quintero y hoy en manos de su hermano Miguel.

La lucha entre estos carteles tiene como campo de batalla a medio México, y lo peor es que, a veces, se usa a policías y soldados como tropas de los capos. El general Gutiérrez Rebollo, por ejemplo, actuó contra los hermanos Arellano Félix en nombre del Estado pero, en realidad, lo hizo para servir a los intereses de Amado Carrillo. Cuando gente de ese mismo general arrestó al "Guero" Palma en 1995, tuvo que enfrentarse a los judiciales federales que custodiaban al capo: ¿dos instituciones estatales enfrentadas por estar al servicio de distintos jefes de la droga!.

Conclusión.- El fenómeno del narcotráfico se acentuó en México justo en el momento en que su viejo régimen autoritario entró en su etapa de decadencia, y el efecto ha sido terrible. La debilidad del entramado institucional --público y privado-- ha corroído el proyecto nacional mismo y puesto en entredicho la soberanía. Si es que hay solución a tan complicado y delicado problema, ésta pasa, entre otros caminos, por el de rehacer y relegitimar el régimen político --renovar a la clase dirigente y a su relación con la sociedad por la vía de la democracia--, y por no asumir como nuestras las prioridades norteamericanas. Hay que sacar al ejército de una guerra sin perspectivas de victoria, pues en este mundo donde el mercado es rey, mientras la sociedad más rica del orbe --la norteamericana-- demande drogas, siempre habrá quien lo arriesgue todo para satisfacerla, pues la recompensa individual es enorme. Urge un debate nacional, a fondo, sobre como debemos comportarnos, sociedad y gobierno, frente a lo que es, en verdad, un problema de seguridad nacional:

la política frente al narcotráfico, que no debe dejarse en manos de generales, procuradores o policías, sino de las más altas instancias políticas.